

Fabra y Valcárcel asumen con los regantes menos agua pero garantizada por una ley

El memorándum que apoyan los presidentes y agricultores consolida la imposición de Castilla-La Mancha de una reserva de 400 hectómetros en la cabecera frente a los 240 actuales para trasvasar El Sindicato alegrará en el Plan Hidrológico del Tajo

D. P. | 27.08.2013 | 23:55

Los regantes del trasvase Tajo-Segura y los gobiernos de la Comunidad Valenciana y Murcia defendieron ayer en un encuentro en Pilar de la Horadada el memorándum firmado el pasado mes de abril con el Ministerio de Agricultura «para defender el trasvase del Tajo». Un documento que, sin embargo, en la práctica avala la exigencia de mínimo de 400 hectómetros en los embalses de cabecera para poder trasvasar a Alicante y Murcia frente a los 240 hectómetros actuales. Es decir, reduce de forma sustancial, a petición de Castilla-La Mancha, el caudal que se puede trasvasar para consumo humano y agrícola y más en época de sequía.



Imagen del encuentro ayer de Fabra, Valcárcel y los representantes de los regantes. **LOINO**

El presidente del Consell, Alberto Fabra, y su homólogo murciano, Ramón Luis Valcárcel, dijeron ayer ante los periodistas antes de mantener una reunión con los regantes que el trasvase es «irrenunciable» y defendieron este memorándum «a rajatabla». Una declaración que contrastó con la que realizó momentos después el presidente del Sindicato Central de Regantes, José Manuel Claver: «No queremos esa famosa guerra del agua y queremos terminar con ella si es que existe. Si la reivindicación de Castilla La Mancha era los 400 hectómetros, que evidentemente a nosotros no nos gusta... buscando la armonía entre todos, nosotros cedemos en eso». Los regantes quieren que ese documento se convierta en la ley que regule el trasvase y que funcione al margen del Plan Hidrológico del Tajo.

Buena parte del contenido del memorándum, que se realizó para dar respuesta política al borrador del Plan Hidrológico del Tajo, no es público. Claver, principal representante de los usuarios agrícolas del trasvase en Alicante y Murcia dijo que «(los regantes) tienen un compromiso de confidencialidad» para no desvelar su contenido. El documento plantea la necesidad de alargar la caducidad de los trasvases, de trimestral a anual, para que que el agua no consumida no se pierda y se guarde para otras épocas del año. Plantea flexibilizar la cesión de derechos entre comunidades de regantes, que la comisión de explotación controle los desembalses en los pantanos de cabecera y que no sea competencia exclusiva de la Confederación del Tajo y la derogación de la cláusula Narbona para que las desalinizadoras no tengan incidencia en el trasvase Tajo-Segura. Además estipula que los trasvases no se concedan de forma discrecional como hasta la fecha si no que se realicen de forma automática en función de las reservas y «sobre todo saca el trasvase del Plan Hidrológico del Tajo», subrayó Claver

No llega a tiempo

«Lo más probable es que el 20 de septiembre, por mucha rapidez que se pueda dar el Gobierno, no esté aprobada esa norma y entonces el Sindicato Central de Regantes va a presentar unas alegaciones como si no existiera el memorándum», aclaró Claver. En esa fecha culmina la fase de consulta al nuevo Plan del Tajo. Fabra y Valcárcel mostraron su apoyo a la alegación, que en este caso sí pediría la supresión de esa reserva mínima de de 400 hectómetros en la cabecera para trasvasar.

«Son unas negociaciones muy difíciles porque estamos hablando de varias comunidades autónomas», matizó Alberto Fabra. «Con muchas interferencias de partidos políticos. Esta planificación hidrológica se debió hacer hace mucho tiempo pero había personas y partidos políticos que no estaban dispuestos a hacerlo», aseguró Fabra, quien destacó el carácter estratégico de la agricultura en la Comunidad que da empleo a cien mil personas.

Por su parte Valcárcel dijo que «no habrá ni un mínimo ápice que nos haga dar un paso atrás», sobre un trasvase que puede suponer «el ser o no ser de una región o de una provincia». Ni Fabra, ni Valcárcel acompañados por un amplio despliegue de cargos populares de la provincia y Murcia llegaron a mencionar a María Dolores de Cospedal, presidenta manchega y secretaria general del PP, impulsora del cambio normativo con un recorte del trasvase que también afectará al abastecimiento humano: la mitad de los caudales que llegan del Tajo se destinan a ese uso.

Por su parte, José Fidel Ros (PP), alcalde de Pilar de la Horadada recordó que el trasvase permitió la transformación económica del municipio en la década de los 80 hacia una agricultura de vanguardia y exportadora.